

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO**81 JTS 58**

111 DPR 351

[PAG. 2105]

[Francisco Santos](#) Recurrido

v.

Comisión Estatal de Elecciones Recurrida

Héctor Luis Acevedo, en su condición de miembro de la Comisión Estatal de Elecciones en representación del Partido Popular Democrático Recurrente

O-80-715

San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 1981

CITese 81 JTS 58

REVISION

OPINION DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SR. NEGRON GARCIA

Abogado de la parte recurrente: Pedro E. Ortiz Alvarez. Abogado de la parte recurrida: Miguel A. Pagán.

TEXTO COMPLETO DE LA OPINION

[PAG. 2106] {DPR 353} [Francisco Santos](#), alcalde entonces incumbente del Municipio de Aibonito se postuló nuevamente como candidato independiente directo (write in) en las elecciones generales del pasado 4 de noviembre de 1980. Recibió 2,270 votos. La Comisión Estatal de Elecciones certificó electo al candidato del Partido Popular Democrático, Benigno Capó, quien obtuvo 4,399 votos sobre 4,015 logrados por Gerardo Rodríguez, candidato del Partido Nuevo Progresista, para una diferencia de 384 votos. Santos, alegando que "por lo menos 300 electores" emitieron votos a su favor fuera del encasillado correspondiente y suscribieron su nombre--indicativo de una clara intención al respecto-- invocando las reglas y principios expuestos en P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400 (1980, el 9 de ese mes recurrió ante la Junta Revisora Electoral solicitando se ordenara a la Comisión la adjudicación a su favor de "todas las papeletas que tengan escrito mi nombre ya que la intención del elector es clara".

La Junta Revisora accedió pronunciándose en lo pertinente:

El Tribunal Supremo en los casos consolidados del Partido Socialista Puertorriqueño v. Comisión Estatal de Elecciones (O-80-635) y del Partido Popular Democrático v. Gerineldo Barreto Pérez (O-80-646), resueltos el 2 de diciembre de 1980, [110 D.P.R. 400], determinó que debe prevalecer la sustancia sobre la forma y "[la] medida determinante es si la marca refleja claramente la intención del elector y no al evento fortuito de que la marca fue incorrectamente ubicada".

El artículo 1.003(22) de la Ley Electoral define el concepto marca como "cualquier medio de expresión afirmativo del voto del elector" y el artículo 2.001(10) establece "el derecho a la libre emisión del voto y a que éste se cuente y se adjudique de la manera en que el elector lo emita".

En este caso muchos electores conscientes de que el recurrente es el actual alcalde del Partido Popular Democrático en Aibonito creyeron correcto escribir el nombre del recurrente fuera del espacio provisto para ello en la columna de {DPR 354} nominación directa. A pesar de que ubicaron incorrectamente su marca (el nombre del recurrente) la intención es clara y manifiesta de votar a favor del recurrente [Francisco Santos](#). Es más clara la intención del elector al escribir un nombre que al hacer una cruz.

La Comisión Estatal de Elecciones deberá adjudicar las papeletas en controversia a favor del recurrente adjudicando toda papeleta en las que aparezca el nombre de "[Francisco Santos](#)", "Paco Santos", o "Santos" aunque estén mal escritos y/o mal ubicados.

Por los fundamentos antes expuestos se ordena a la Comisión Estatal de Elecciones revisar todos los colegios y papeletas de los Precintos 73 y 74 de Aibonito y proceda a adjudicar a favor del recurrente toda papeleta donde aparezcan el nombre de "Paco Santos", "Paco", "[Francisco Santos](#)", o iniciales donde claramente se identifica al recurrente, independientemente de su ubicación en la papeleta electoral. (Enfasis nuestro y escolios omitidos.)

El 16 de diciembre dicho foro, en ocasión de pasar juicio y denegar una moción de reapertura y reconsideración formulada por el Partido Popular Democrático, explicó las proyecciones de la transcrita Resolución del siguiente modo:

El alcance de nuestra resolución del 10 de diciembre no tiene el efecto que alega el Partido Popular Democrático. No obstante, procedemos a aclarar el alcance de la misma para evitar futuras controversias.

La Comisión Estatal de Elecciones deberá pasar juicio sobre las papeletas en controversia tomando en consideración que la regla vigente adoptada por el Tribunal Supremo en el caso de P.S.P. vs. Comisión Estatal de Elecciones, [110 D.P.R. 400], de 2 de diciembre de 1980, es que debe prevalecer la intención manifiesta del elector al marcar su papeleta.

Si el nombre del recurrente aparece escrito en la columna de nominación directa en el espacio provisto para el puesto de alcalde o si lo escribió en la columna del Partido Popular Democrático sobre el nombre del candidato Benigno Capó López, el voto será adjudicado a favor del recurrente.

Si el elector marcó su papeleta insertando el nombre de {DPR 355} Santos seguido de "Gobernador" o "Representante", se debe adjudicar para esos cargos respectivamente.

Por otro lado, si el elector ubicó incorrectamente el nombre del recurrente en la columna de nominación directa [para alcalde] deberá interpretarse que la intención del elector fue votar por el recurrente como candidato a alcalde.

De igual forma, si el elector escribió el nombre del recurrente en cualquier espacio en blanco de la papeleta, que no afecta a ningún otro candidato, como por ejemplo en la columna de nominación directa en el espacio en blanco que corresponde al espacio provisto para imprimir la insignia de un partido, dicho voto debe ser adjudicado a favor del recurrente, [Francisco Santos](#).

No será adjudicado ningún voto a favor de candidato alguno si la marca del elector fue escrita al dorso de la papeleta.

Estos criterios expresados deberán servir de guía a la [PAG. 2107] Comisión Estatal de Elecciones para adjudicar las papeletas en controversia. Cualquier otra situación no contemplada en esta Resolución deberá interpretarse de acuerdo con la manifiesta intención del elector.

No conforme, el P.P.D. acudió ante nos señalando y discutiendo como errores que la Junta Revisora: (a) no podía adjudicar papeletas a base de prueba oral, sino de un examen visual que le permitiera determinar cuál fue la intención del elector; (b) no podía ordenar un recuento con posterioridad, ausente una alegación de que el resultado podía ser alterado; y (c) no podía adjudicar un voto a favor de un candidato independiente sin que hubiera una determinación de intención inequívoca del elector.

A los fines de evaluar los méritos del recurso, ordenamos a la Junta Revisora nos ilustrara gráficamente--utilizando modelos de papeletas--la resolución recurrida. En 24 de marzo de 1981 dicho foro dio cumplimiento a ese mandato. (Anejos I--VIII unidos a esta opinión.)

I

Primeramente, atenderemos el planteamiento del recurrente Partido Popular respecto a que la impugnación de {DPR 356} Santos no aduce hechos por no alegar que matemáticamente los trescientos votos adicionales puedan llevarlo a prevalecer. Ciertamente, si fuéramos a resolver este recurso con abstracción de la impugnación que pende ante la Junta Revisora (JR-292) incoada por el candidato derrotado del Partido Nuevo Progresista Gerardo Rodríguez Rivera contra Barreto Pérez, Administrador General de Elecciones, el nuevo alcalde certificado Benigno Capó López y el P.P.D., [1] quizás tendría razón en invocar y sería de aplicación la prueba de probabilidad matemática. *Esteves v. Srio. Cám. de Representantes*, 110 D.P.R. 585 (1981). No siendo así, en las circunstancias específicas de autos, el criterio aritmético antes mencionado no impide que se realice un conteo exacto y correcto que refleje fiel y finalmente la intención y votación de todo el electorado del Municipio de Aibonito. Lo vital es el triunfo de la democracia en todos los lugares de Puerto Rico. *P.P.D. v. Barreto Pérez*, 110 D.P.R. 376 (1980).

II

Aclarado este extremo, percibimos que el examen del dictamen de la Junta Revisora a la luz de nuestra decisión en P.S.P., supra--salvo las instancias más adelante analizadas--es correcto y debe prevalecer por estar acorde con nuestro pronunciamiento central en el sentido de que, ante la preeminencia del derecho al sufragio, es menester apartarnos de una interpretación literal y rigurosa que plantearía inevitablemente un choque constitucional. En evitación de un decreto de inconstitucionalidad, allí resolvimos y señalamos que "[1]a medida determinante es si la marca refleja claramente la intención del elector y no el evento fortuito de que la marca fue incorrectamente ubicada". Enfatizamos que la "circunstancia de que en el sistema de colegio abierto, en contraste con el cerrado, no existe la oportunidad para que se impartan instrucciones {DPR 357} generales y comunes a todos los electores de cómo votar refuerza la necesidad de esta interpretación. El evento comicial envuelve a una población que excede el millón y medio de todo tipo de personas, de las más diversas posiciones sociales y condiciones intelectuales y

académicas. Bajo esa óptica, hemos de recordar la admonición constitucional de que '[n]adie será privado del derecho al voto por no saber leer o escribir . . .', Art. VI, Sec. 4. En su correcta dimensión este postulado puede conllevar, en sus variadas manifestaciones, una prohibición a que se anule el voto por que el elector no siga instrucciones que sólo afectan de manera mínima el interés legislativo que persigue reconocer la verdadera voluntad del elector".

III

Con esta perspectiva presente, notamos que la objeción del recurrente, basada en la necesidad de un examen visual de las papeletas, ha quedado superada con las ilustraciones gráficas que hemos exigido. Evaluemos los méritos del recurso.

El examen visual e integral de la manera y ubicación en que se proyectan los votos, según el decreto de la Junta Revisora, nos mueve a concluir que el mismo debe prevalecer salvo con referencia al Anejo II, Ejemplos A y B, y al Anejo VII, Ejemplos B al H, en que resulta erróneo. En el primero, Anejo II, la norma es restrictiva y debe ampliarse. En torno al Anejo VII, del examen comparativo, objetivo, lógico e inteligente no surge la intención clara y manifiesta del elector como la apreció la Junta. Nos explicamos.

ANEJO II -- Ejemplos A y B

Conforme el decreto de la Junta Revisora, bajo el Ejemplo A, "[s]i en el espacio en blanco sobre el cuadrante correspondiente al Partido Popular Democrático, el elector ubicó el nombre de '[Francisco Santos](#)', 'Santos' o 'Paco Santos' y la palabra 'Alcalde', debe adjudicársele dicho voto al {DPR 358} candidato [Francisco Santos](#), aun cuando la marca del elector esté ubicada erróneamente". Bajo el Ejemplo B, "[e]n aquellos casos en que el elector haya insertado el nombre de '[Francisco Santos](#)', 'Paco Santos' o 'Santos' y la palabra 'Alcalde' dentro del cuadrante del Partido Popular Democrático, dicho voto debe ser adjudicado por la Comisión Estatal de Elecciones a favor del candidato [Francisco Santos](#)".

Coincidimos con ese foro, pero somos del criterio que la plenitud de la doctrina estaría indebidamente limitada si no la extendiéramos a todas las instancias análogas, esto es, cuando la intención del elector haya sido así manifestada sobre y dentro de cuadrantes correspondientes a cualquiera de los partidos políticos. Debe modificarse en este extremo la Resolución de la Junta Revisora. Recuérdese, que "[p]ara los funcionarios y organismos electorales llamados por ley a adjudicar un voto, debe ser norma irreducible la de evaluarlo con el mayor respeto a la voluntad del elector y con el óptimo esfuerzo para salvar su intención si ésta encuentra apoyo en la inteligencia aplicada al examen de la papeleta, obviando inobservancias de índole formal que en ejercicio de entendimiento razonable no ocultan ni enredan en confusión la verdadera intención del votante ". (Énfasis nuestro.) P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 460 (1980).

ANEJO VII--Ejemplos B al H

Para comprender este análisis es menester una comparación. Adviértase que la Junta Revisora, según lo ilustran los Anejos I, II (Ejemplo (C)), III y IV, detectó una clara intención del elector en favor de Santos cuando su nombre se escribía en el encasillado número 6--existente para el cargo de alcalde en la columna de cualquier partido político--siempre que se tachara el nombre del candidato en particular que aparecía preimpreso. Dos elementos respaldan la conclusión de esa intención: el {DPR 359} haberse escrito el nombre de Santos y tachado el preimpreso.

Siguiendo esa metodología, la Junta también--según el Anejo VI--determinó que en "aquellos casos en que el elector marcó su papeleta en la columna de nominación directa, insertando el nombre de Santos,

seguido de "Gobernador" o [PAG. 2108] "Representante" u otro cargo que no sea el de Alcalde, se debe adjudicar el voto para el cargo así designado". O sea, la Junta concluyó que el nombre de Santos, consignado dentro del encasillado que contiene preimpreso o en donde se escribió un cargo distinto al de alcalde en la columna de nominación directa, conlleva la adjudicación para el otro cargo así enunciado. (Gobernador, Representante o cualquier otro cargo.) Comulgamos con ese enfoque que balanceadamente recoge sin especulación alguna la intención del elector, pues ha mediado una acción afirmativa que precisamente excluye y curiosamente deja intocado el encasillado correspondiente y disponible para el cargo de alcalde.

Sin embargo, la Junta no sigue la lógica y fuerza de ese razonamiento respecto al Anejo VII, en que pretende convalidar como votos emitidos válidamente para Santos, como alcalde, la mera inclusión de su nombre sin ninguna otra ulterior expresión, y sin haberse tachado el cargo distinto que consta preimpreso en la papeleta, como se hace en otras instancias. Ello inevitablemente implica que el nombre de Santos ha sido expresamente escrito y consignado dentro de unos encasillados que corresponden a otros cargos distintos que igualmente el elector optó por no alterar. El resultado práctico es que la intención del elector, en cuanto a votar por Santos para alcalde, no es clara ni manifiesta. Por el contrario, la situación es análoga y equivalente a los ejemplos expuestos en el Anejo VI, esto es, votos para Santos, Gobernador; Santos, Comisionado Residente; Santos, Senador o Representante por Distrito, o Santos, miembro de la Asamblea Municipal. {DPR 360}

Es apreciable la diferencia notable que existe cuando la marca del elector, aunque en apariencia conflictiva, refleja una intención manifiesta. Sin embargo, hemos visto como ello no es así en los Anejos VI y VII, excepto el Ejemplo A. Admitir como votos válidos para el cargo de alcalde la expresión de "Santos" junto al cargo--sea preimpreso o escrito--de Gobernador, Comisionado Residente, Senador, Representante o Asambleísta tiende a ir contra la voluntad plasmada del elector. Debe también modificarse en esta instancia la Resolución recurrida.

IV

Finalmente, este recurso, al igual que la controversia suscitada en P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, supra, demuestra la imperiosa necesidad de que en el futuro la impresión de las papeletas electorales--en unión a una campaña amplia y efectiva de orientación previa--se haga científicamente, de modo tal que permita a cualquier elector consignar claramente su voto, reduciendo al mínimo el margen de discusión. Observamos que las papeletas utilizadas en los recientes comicios no representan el mejor modelo que en diseño, a esos fines, se puede lograr. La técnica de evitar lugares y espacios en blanco innecesarios, al igual que ampliar los correspondientes a los encasillados actualmente disponibles para todos los candidatos son, entre otras, medidas ejemplarizantes de aspectos fundamentales que deben revisarse en abono del fortalecimiento de la democracia puertorriqueña. {DPR 361}

ANEJO I

[PAG. 2109] La Junta Revisora concluyó:

Si bajo la columna correspondiente al Partido Nuevo Progresista, en el espacio provisto para el cargo de Alcalde, el elector tachó el nombre del candidato por dicho partido político Gerardo Rodríguez Rivera y, en su lugar, escribió el nombre de "[Francisco Santos](#)", "Santos", "Paco Santos" o iniciales por las que claramente se identifica tal candidato (P. Santos o F. Santos) la Comisión Estatal de Elecciones debe adjudicar dicho voto a favor del Sr. [Francisco Santos](#). (Énfasis nuestro.)

Confirmada esta determinación por el Tribunal.

ANEJO I

DOBLE CLICK PARA VER LA PLANILLA

{DPR 363} ANEJO II, Ejemplo A

[PAG. 2110] La Junta Revisora concluyó:

Si en el espacio en blanco sobre el cuadrante correspondiente al Partido Popular Democrático, el elector ubicó el nombre de "[Francisco Santos](#)", "Santos" o "Paco Santos" y la palabra "Alcalde", debe adjudicársele dicho voto al candidato [Francisco Santos](#), aun cuando la marca del elector esté ubicada erróneamente.

ANEJO II, Ejemplo B

La Junta Revisora concluyó:

En aquellos casos en que el elector haya insertado el nombre de "[Francisco Santos](#)", "Paco Santos" o "Santos" y la palabra "Alcalde" dentro del cuadrante del Partido Popular Democrático, dicho voto debe ser adjudicado por la Comisión Estatal de Elecciones a favor del candidato [Francisco Santos](#).

ANEJO II, Ejemplo C

La Junta Revisora concluyó:

Si bajo la columna correspondiente al Partido Popular Democrático, en el espacio provisto para el cargo de Alcalde, el elector tachó el nombre del candidato Benigno Capó López y, en su lugar, escribió el nombre de "[Francisco Santos](#)", "Paco Santos", o "Santos" o iniciales por las que claramente se identifica al candidato (F. Santos o P. Santos) se debe adjudicar dicho voto a favor del Sr. [Francisco Santos](#).

El Tribunal Supremo coincide con estas apreciaciones, pero modifica a la Junta a los fines de aplicar la norma a instancias análogas cuando la intención del elector haya sido así manifiesta sobre y dentro de los cuadrantes correspondientes a cualesquiera partidos políticos. {DPR 365}

DOBLE CLICK PARA VER LA PLANILLA

ANEJO III

[PAG. 2112] La Junta Revisora concluyó:

Si bajo la columna correspondiente al Partido Independentista Puertorriqueño, en el espacio provisto para el cargo de Alcalde, el elector tachó el nombre del candidato por dicho partido político Israel González Hernández y, en su lugar, escribió el nombre de "[Francisco Santos](#)", "Paco Santos", o "Santos" o iniciales por las que claramente se identifica al candidato (F. Santos o P. Santos) se debe contar dicho voto a favor del candidato [Francisco Santos](#). (Énfasis nuestro.)

Confirmada esta determinación por el Tribunal. {DPR 366}

ANEJO III

DOBLE CLICK PARA VER LA PLANILLA

{DPR 367} ANEJO IV

[PAG. 2113] La Junta Revisora concluyó:

Si bajo la columna correspondiente al Partido Socialista Puertorriqueño, en el espacio provisto para el cargo de Alcalde, el elector tachó el nombre del candidato por dicho partido político Edwin Matos Hernández y, en su lugar, insertó el nombre de "[Francisco Santos](#)", "Paco Santos", o "Santos" o iniciales por las que claramente se identifica a tal candidato (F. Santos o P. Santos), se debe adjudicar dicho voto a favor del candidato [Francisco Santos](#). (Enfasis nuestro.)

Confirmada esta determinación por el Tribunal. {DPR 368}

ANEJO IV

DOBLE CLICK PARA VER LA PLANILLA

{DPR 369} ANEJO V

[PAG. 2114] La Junta Revisora concluyó:

Si el nombre del candidato [Francisco Santos](#) o ya sea cualquiera de las denominaciones "Paco Santos", "Santos" o las iniciales "P. Santos" o "F. Santos" aparece en la columna de nominación directa en el espacio provisto para el cargo de Alcalde, el voto deberá adjudicarse a favor de dicho candidato.

Confirmada esta determinación por el Tribunal. {DPR 370}

ANEJO V

DOBLE CLICK PARA VER LA PLANILLA

{DPR 371} ANEJO VI

[PAG. 2115] La Junta Revisora concluyó:

En aquellos casos en que el elector marcó su papeleta en la columna de nominación directa, insertando el nombre de Santos, seguido de "Gobernador" o "Representante" u otro cargo que no sea el de Alcalde, se debe adjudicar el voto para el cargo así designado. (Enfasis nuestro.)

Confirmada esta determinación por el Tribunal.

{DPR 372} ANEJO VI

DOBLE CLICK PARA VER LA PLANILLA

{DPR 373} ANEJO VII, Ejemplos A al H

[PAG. 2116] La Junta Revisora concluyó:

Por otra parte, si en la columna de nominación directa, el elector ubicó incorrectamente el nombre de [Francisco Santos](#) o cualquiera de los otros nombres por los que hemos reiterado que se identifica a tal candidato, deberá interpretarse que la intención del elector fue votar por dicho candidato para el cargo de Alcalde, cargo para el cual éste hizo compañía y así deberá adjudicarse el voto.

Con excepción del Ejemplo "A", el Tribunal Supremo revoca esta determinación ya que al no haber tachado el elector la palabra preimpresa que representa un cargo distinto al de alcalde, no puede admitirse que surja una intención clara y manifiesta del elector como un voto para Santos, alcalde.

{DPR 374} ANEJO VII, EJEMPLOS A AL H

DOBLE CLICK PARA VER LA PLANILLA

{DPR 375} ANEJO VIII, Ejemplos A al D

[PAG. 2117] La Junta Revisora concluyó:

Si el elector escribió el nombre del candidato [Francisco Santos](#) o cualquiera de los otros nombres por los que hemos especificado que se identifica a tal candidato, en cualquier espacio en blanco de la papeleta que no afecte a ningún otro candidato, dicho voto también debe adjudicarse a su favor.

DISPONIENDOSE, además, que en aquellos casos en que el elector tachó el nombre de un candidato a Alcalde, sustituyéndolo por el nombre de "[Francisco Santos](#)", "Paco Santos" o "Santos" o ya escribiendo las iniciales por las que claramente se identifica a dicho candidato (véase el Anejo I, Anejo II, Ejemplo C, Anejo III y Anejo IV), deberá restarse un voto al candidato a Alcalde por el partido político de que se trate si el elector votó a su vez a favor de dicho partido político.

Confirmada esta determinación por el Tribunal. {DPR 376}

ANEJO VIII, EJEMPLOS A AL D

DOBLE CLICK PARA VER LA PLANILLA

DISPOSICION

[PAG. 2118] Conforme lo expuesto, se dictará la correspondiente sentencia que modifique la Resolución de la Junta Revisora. Así modificada, será confirmada.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disidente a la que se unió el Juez Asociado Señor Rigau.

ESCOLIO 81 JTS 58

1. Tomamos conocimiento judicial de ese recurso.

{DPR 377} VOTO DISIDENTE DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR DIAZ CRUZ AL QUE SE UNE EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIGAU - 81 JTS 58

Disiento de la opinión del Tribunal que acoge como legítimo y digno de controversia lo que a todas luces es un recurso de hostigamiento, que de la propia faz de la solicitud de revisión ante la Junta se

muestra totalmente desprovisto de méritos o de cuestión justiciable.

Tenemos resuelto que los tribunales no aplicarán el Derecho a cuestiones académicas ni harán cumplir deberes intangibles. Siguiendo esta norma, que es substantiva y no procesal, y que por tanto no varía con el advenimiento de las Reglas de Procedimiento Civil, hemos dicho que los tribunales no se han constituido para resolver cuestiones académicas. *Viñas v. Cuevas, Comisionado*, 61 D.P.R. 295, 296 (1943); que una acción cuyo único objeto es resolver cuestiones abstractas, es puramente académica, y por lo tanto, improcedente. *Navarro v. Calderón*, 61 D.P.R. 339, 342 (1943) *Echeandía v. Saldaña*, 61 D.P.R. 799, 804 (1943); *Cortés Hnos. & Co. v. Menéndez*, 39 D.P.R. 852, 853 (1929), in fine; que una causa de acción debe hacer referencia a una verdadera controversia. Las cortes no están constituidas con el fin de resolver cuestiones de derecho especulativas y abstractas, o para establecer reglas que sirvan de norma futura a las personas en sus negocios y relaciones sociales; sino que están limitadas en su acción judicial a las verdaderas controversias en que necesariamente están envueltos los derechos legales de las partes y que pueden ser resueltos concluyentemente. *Bianchi v. Pierazzi et al.*, 25 D.P.R. 631, 636 (1917).

El ahora recurrido [Francisco Santos](#), incumbente derrotado en las primarias de su partido P.P.D. en su candidatura a Alcalde del Municipio de Aibonito hizo campaña como candidato de nominación directa (write in). El escrutinio {DPR 378} practicado por la Comisión Estatal de Elecciones dio el siguiente resultado para Alcalde: Capó del P.P.D., 4,399 votos; Rodríguez Rivera del P.N.P., 4,015 votos; y el recurrido Santos, 2,270 votos. Este impugnó ante la Junta Revisora Electoral el resultado certificado por la Comisión bajo la alegación de que dejaron de adjudicarle, por aplicación de reglas de escrutinio de la Comisión, "por lo menos" 300 votos. La insuficiencia numérica de la solicitud de [Francisco Santos](#) para cambiar el resultado en su candidatura a la alcaldía es de claridad que hiere la retina.

Desestimaría de plano esta impugnación de resultado de escrutinio porque sus propias alegaciones la caracterizan como ejercicio fútil, toda vez que aun adjudicando al candidato recurrido Sr. Santos los votos que para sí reclama quedaría rezagado a enorme distancia de otros dos contendientes por la Alcaldía de Aibonito. Nadie tiene derecho a inquietar las determinaciones finales de los organismos electorales con reclamaciones vacías de contenido, inconsecuentes o caprichosas. Abrir brecha para este tipo de impugnación es invitar el caos en futuras elecciones en que seguramente proliferarán estas acciones de hostigamiento, desestabilizantes del proceso democrático.

La impugnación de la elección es un proceso democrático de grave responsabilidad, encauzado en el Derecho público, de consecuencias profundas en la estabilidad del régimen y en la confianza del pueblo en el sistema para organizarlo. La acción impugnatoria, más que la acción civil ordinaria, debe estar reservada a quien tenga razón de pedir o base para solicitar [PAG. 2119] remedio. El ataque al resultado electoral no es galería de tiro a la que cualquier concursante puede presentarse con su escopeta a romper platillos de barro.

Los pleitos electorales deben tener una legitimidad que justifique la intervención del Tribunal para proteger la integridad del proceso. La petición en este caso está carente de toda razón para pedir remedio. No satisface el {DPR 379} requisito esencial de exponer hechos que, de probarse, cambiarían el resultado de la elección. Art. 6.014, Ley Electoral, 16 L.P.R.A. sec. 3274; *Esteves v. Srio. Cámara de Representantes*, 110 D.P.R. 585 (1981).

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

